

Nota **editorial**

De nuevo los españoles tendremos que ir a las urnas. Y esta convocatoria no es el resultado de la disolución “por defecto” que prevé el artículo 99 de la Constitución, sino el desenlace activamente deseado y buscado por el presidente del Gobierno en funciones que, por razones de estricta conveniencia partidista, ha convertido esta previsión excepcional del texto constitucional en una segunda vuelta encubierta con la que espera mejorar sus resultados. Sánchez ha actuado con una arrogancia sin precedentes, exigiendo a sus adversarios hacer posible su investidura sin compromiso alguno por su parte y llevando a cabo un vodevilesco simulacro de negociación con su supuesto “socio preferente”.

A Sánchez le habíamos visto firmar en la Moncloa un pacto presupuestario con el líder de Podemos para luego escandalizarse de las posiciones de Pablo Iglesias en relación con Cataluña. Le vimos reunirse con Torra en el Palacio de Pedralbes, silenciar la Constitución y elogiar al dirigente separatista catalán para luego ejercer de hombre de Estado preocupado por la reacción del independentismo a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los políticos acusados de rebelión. Ha señalado a la alcaldesa de Barcelona por la apelación de esta a la “movilización popular” con-

tra la sentencia, olvidando que si Ada Colau puede ejercer de agitadora desde el ayuntamiento es porque el Partido Socialista le ha puesto ahí.

Lo cierto es que España sigue a la espera de un gobierno responsable, activo y estable que pueda hacer frente a los problemas que amenazan con convertirse en debilidades sistémicas. Nuestro país tiene un primer problema de gobernabilidad que está lastrando el rendimiento del conjunto del sistema político. La “nueva política” y sus mediáticos protagonistas no han cumplido mínimamente las expectativas. Para ser “nueva” ha envejecido con una asombrosa rapidez y para alardear de capacidad política frente al bipartidismo, su acervo es exiguo.

En esta secuencia –no por orden de importancia– el segundo problema que afronta España es el del modelo territorial y su integridad constitucional frente a la amenaza ostensible del independentismo golpista catalán, pero que debe afrontar también las pretensiones que ya presenta el nacionalismo vasco y problemas generales como un nuevo sistema de financiación, una nueva dinámica de cooperación y lealtad institucional, y nuevos instrumentos de solidaridad y cohesión.

España –y este es el tercer gran epígrafe de las tareas pendientes– tiene que retomar una agenda de reformas, urgida ahora por la aproximación de tiempos económicos menos favorables, la negativa evolución demográfica que presiona sobre la sostenibilidad del modelo de bienestar y los profundos cambios en el modelo productivo que están generando la revolución digital y la transformación energética.

Finalmente, España debe asentar una posición de influencia en el escenario europeo e internacional en su sentido más amplio. El abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido determina la necesidad de articular un nuevo equilibrio continental y en ese proceso, que implica también una redistribución de poder e influencia, España no puede quedar ausente.

Cuesta creer que la levedad de este juego político cortoplacista instigado por el Partido Socialista pueda generar las condiciones mínimas esenciales para un gobierno que se ocupe de lo que ya toca ocuparse. Ante estas elecciones hay una circunstancia que debe ser subrayada porque pocas veces el electorado, a izquierda y derecha, ha podido acudir a las urnas mejor informado sobre la trayectoria de los partidos que van a pedir su confianza y los efectos de su voto. La ralentización económica está ahí y nadie puede llamarse a engaño sobre las desastrosas

consecuencias de dejar en manos de la izquierda la gestión de la crisis. Poco puede esperarse en la cuestión territorial de un Partido Socialista que en Navarra ha incorporado a Bildu a su fórmula de gobierno y que en Cataluña se asocia, según le convenga, con Esquerra Republicana, la amalgama procedente de la antigua Convergencia pasada por Puigdemont o la alcaldesa Colau que ahora parece desvelar a Pedro Sánchez. Ninguna conclusión seria, ninguna proyección fiable pueden hacerse a partir de los meses de gobierno Frankenstein presidido por Sánchez.

En el centro derecha, por su parte, los ciudadanos tienen elementos de juicio más que sobrados para reflexionar sobre su voto. La suma es la clave para la viabilidad de una alternativa a la izquierda; una alternativa moderada, integradora y competente que ha de basarse en una apelación a los españoles constructiva y de inequívoco sentido cívico. El Partido Popular tiene el deber y la disposición a promover esta apelación a la suma. Y si quienes deberían mostrar similar disposición no asumen esta evidencia y actúan en consecuencia, han de ser los votantes los que reconduzcan las fuerzas que han de confluir para que España salga de este bucle que Sánchez tal vez crea que le garantiza su continuidad indefinidamente “en funciones”, pero que condena a nuestro país y a sus instituciones a un desgaste estéril y corrosivo. ■